



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 83102/2017

AUTOS: "SCANIA ARGENTINA S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA"

Buenos Aires,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 70/76 contra la Resolución nro. DRF 5329 que desestimó el recurso de impugnación administrativa que impuso una multa al quejoso, por la infracción cometida al artículo agregado sin número a continuación del art. 40 de la ley 11683.

Que notificada de ello, se hizo saber a la actora que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que a fs. 84 el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes sin informar si se efectuó el depósito de la deuda reclamada.

Que surge de fs. 61 que el apelante dió cumplimiento con el requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820, por lo que corresponde la apertura de esta instancia.

Que la sanción cuestionada tiene origen en acta de inspección obrante a fs.1/2 en la que se hace constar que los Sres. Lucas Gastón Alejandrini y Alejandro Fernandez se desempeñarían como dependientes de la empresa relevada. Notificada de ello, la contribuyente formula su impugnación.

Que en el recurso de apelación en tratamiento la actora sostiene que los presuntos trabajadores a su cargo, es decir las personas mencionadas precedentemente, son conductores profesionales que trabajan en forma independiente prestando servicios a diferentes empresas y que se encuentran inscriptos en AFIP como monotributistas.

Que asimismo, alega que los mencionados profesionales fueron contratados por SCANIA ARGENTINA S.A atento la especialidad de sus servicios para trasladar, movilizar y mantener en condiciones los vehículos de la marca durante el evento "Expoforestal-Posadas" en la cual participa como expositora Acompaña diversa documental que respalda sus dichos.

Que surge de las actuaciones, de la propia resolución cuestionada obrante a fs. 32/35 y también de la prueba aportada en autos una cuestión que tiene una singular relevancia, esto es el testimonio de los trabajadores relevados que se identificaron como empleados.

Que en este punto es importante destacar que si bien se aportaron constancias de inscripción de los Sres. Alejandrini y Fernandez en la AFIP como monotributistas, y se adjuntaron facturas de servicios supuestamente prestados a la contribuyente, dichas constancias documentales carecen de relevancia probatoria frente a las explícitas declaraciones de los involucrados en el sentido que indicaron espontáneamente al inspector actuante ser dependientes de la empresa relevada, y donde ambos señalan la fecha de ingreso y el monto mensual del salario que perciben.

Que tanto el recurso administrativo como la apelación en tratamiento no resultan suficientes a nuestro entender, para desvirtuar los fundamentos vertidos en la resolución atacada. En ella el organismo sostiene acertadamente que el inspector encontró a los trabajadores prestando servicios que son propios del giro comercial de la accionante, declararon su fecha de ingreso y remuneración tal como se señaló precedentemente por lo que el Ministerio actuante presume la existencia del vínculo laboral (Conf. Art. 23 de la ley 20744).

Que cabe señalar en este punto que la dependencia ministerial, se encuentra facultada para determinar las sanciones controvertidas al constatare hechos y circunstancias ciertas establecidas en la normativa aplicable, que indiquen la presencia de situaciones de evasión previsional, siendo posible ello mediante los controles y verificaciones para la comprobación de tales indicios primarios que indican la existencia de trabajo encubierto o "en negro". En este contexto, es dable recordar que las nulidades sólo resultan oponibles en la medida que coloquen al administrado o responsable en una situación de indefensión o que obstruyan la normal tramitación del procedimiento administrativo, y no resulta razonable la nulidad peticionada si el apelante pudo ejercer su derecho de defensa, ya



que tuvo pleno conocimiento de las actuaciones administrativas, así como la posibilidad de fundar los argumentos que justificarían su posición tanto en sede administrativa como judicial.

Que por otra parte es importante destacar que el esfuerzo dialéctico de la recurrente no ha de prosperar, toda vez que no logra conmover ni controvertir los fundamentos de la resolución atacada y en base a los cuales se le impuso la multa cuestionada, por lo que se comparten por ser ajustados a derecho a la luz de las pruebas obrante en autos, debidamente ponderadas con arreglo al principio de la sana crítica (art. 386 CPCCN.). Por ello, consideramos que corresponde confirmar la resolución administrativa impugnada.

Que por lo expuesto, el Tribunal **RESUELVE**: 1) Rechazar el recurso deducido y confirmar la resolución administrativa; y 2) Sin costas en la alzada. (Art. 68 del CPCCN).

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 del R.J.N)

